



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO**

*Dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022)*  
*Marinilla – Antioquia*  
Oficio Nro. 348

Doctor

**Fernando León Bolaños Palacios**

**H. Magistrado**

**Sala de Casación Penal**

**Sala de Decisión de Tutelas Nro.1**

Corte Suprema de Justicia

Bogotá D.C

**Tutela:** 11001020400020220095500

**Radicado Interno** Nro. 123956

**Accionante:** Luz Miriam Castaño Quintero

**Accionados:**

\*Sala De Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá

\*Sociedad de Activos Especiales SAE-SAS

**Vinculado:** Juez Penal del Circuito de Marinilla – Antioquia y otros

Cordial Saludo.

Conforme a lo ordenado por su Despacho, mediante el cual se ordena vincular por pasiva el Juzgado Penal del Circuito de Marinilla, concediendo un término de veinticuatro (24) horas para rendir el informe correspondiente; comedidamente me permito poner de presente lo siguiente:

En efecto, en el Juzgado Penal del Circuito de Marinilla, ingresó por reparto el proceso penal radicada bajo **CUI 05 440 60 00340 2011 00020** con **Número interno 2011-00142** que se adelantó contra de **Elder Julián Toro Castaño**, por la comisión de la conducta punible de “*Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes*”, dicho trámite culminó de forma anticipada, en virtud del preacuerdo celebrado

con la Fiscalía 94 Seccional de Marinilla el día **19 de septiembre de 2011**.

En la sentencia condenatoria se encontró al señor Elder Julián Toro Castaño, penalmente responsable de la conducta punible del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes (Art.376 Inc.2 del CP) en calidad de autor, en la modalidad conservar, condenándosele a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión y el equivalente en pesos a un (1) salario mínimo legal mensual de multa. Se le concedió además el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, fijándosele un periodo de prueba de treinta y dos (32) meses y la suscripción de la diligencia de compromiso

En ese orden de ideas, este Juzgado motivó de forma suficiente y conforme a los lineamientos legales la decisión de primera instancia; la cual cobró ejecutoria el día 19 de septiembre de 2011, dando tránsito a cosa juzgada, ante la ausencia de recursos por las partes.

Así las cosas, la labor del Juzgado Penal del Circuito de Marinilla, observó en todo momento respeto irrestricto por el debido proceso y demás Garantías Constitucionales legales de todas las partes e intervinientes concluyendo en debida forma con la Sentencia Condenatoria que dio tránsito a cosa juzgada; por lo que se procedió con las publicaciones legales y el posterior envío del expediente ante los Juzgados de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de Antioquia (Reparto), perdiéndose competencia para actuar en los trámites subsiguientes y sobre los cuales versa la inconformidad de la accionante.

Nótese que el descontento de la actora gira en torno al proceso de extinción de dominio que se adelantó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, tal y

como se puede evidenciar en los fundamentos fácticos y en las pretensiones de la acción constitucional.

Al respecto es importante anotar que, no es factible acudir al mecanismo constitucional en busca de una tercera decisión y para este Juzgado es claro que el objetivo real, es rehacer etapas procesales que están precluidas.

Precisamente la Corte Constitucional para evitar el uso indiscriminado de la acción de tutela, ha establecido unos parámetros básicos de procedibilidad que deben ser analizados en todos los casos, esto es, (i) legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad. Sin embargo, a fin de evitar el uso abusivo de la acción de tutela para controvertir las decisiones tomadas por los jueces, el máximo órgano de cierre constitucional dispuso un filtro adicional de procedibilidad, disponiendo requisitos generales, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que se refieren a la procedencia del amparo, una vez interpuesto; es así como la Corte Constitucional ha decantado toda una línea jurisprudencial<sup>1</sup>, reiterada en Sentencia T-643 de 2016, que dispone como requisitos generales:

*“a) Que el asunto que se discuta implique una evidente relevancia constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes, exigencia que busca evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.*

*b) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios o extraordinarios excepto cuando lo que se pretende es evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.*

*c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, lo que significa que la tutela debe interponerse en un término razonable a partir del hecho que originó la vulneración. Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.*

---

<sup>1</sup> Sentencia T – 217 de 17 de abril de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. Ver también Sentencias C – 590 de 8 de junio de 2005, M. P. Jaime Córdoba Treviño y SU – 913 de 11 de diciembre de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

d) Si lo que se alega es la existencia de una irregularidad procesal, debe ser evidente que la misma tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y b) afecta los derechos fundamentales del accionante, salvo cuando se trate de una prueba ilícita obtenida con violación de esos derechos.

e) Que el demandante identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado dentro del proceso judicial tal vulneración si ello hubiese sido posible.

f) Que no se trate de fallos de tutela, de forma tal que se evite que las controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida”.

Ahora, además de los requisitos generales de procedibilidad mencionados atrás, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales, que deben quedar plenamente demostradas. Estas según la jurisprudencia atrás referenciada son:

a). Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b). Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c). Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales<sup>2</sup> o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e). Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f). Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

---

<sup>2</sup> Sentencia T-522/01

*g). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado<sup>3</sup>.*

*h). Violación directa de la Constitución.*

Así las cosas, se reitera la procedibilidad de la acción de tutela la determina el cumplimiento de los requisitos generales y adicional a ello las exigencias específicas, referenciadas en líneas precedentes.

Aunado a lo anterior, de acuerdo al principio de preclusividad de los actos procesales no se pueden revivir instancias ya cerradas o expiradas, máxime tratándose de una segunda instancia, habida cuenta que, el asunto objeto de debate, fue sometido en dos ocasiones al escrutinio y análisis de los jueces.

Claramente el esfuerzo excesivo por encuadrar esta tutela, denota cada vez más, que se está abusando de una figura excepcional, ante lo cual, este Juzgado solicita de forma respetuosa:

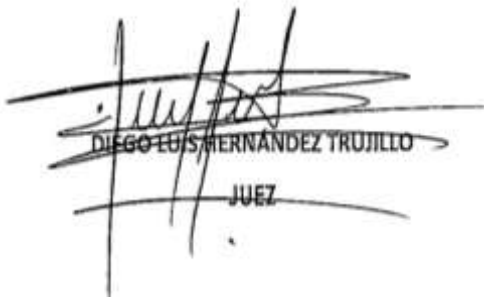
1. **DESVINCULAR de la presente acción constitucional al Juzgado Penal del Circuito de Marinilla, Antioquia**, al no acreditarse vulneración alguna de derechos fundamentales que le sea atribuible.
2. Subsidiariamente, que se declare improcedente la acción constitucional por no cumplirse con los requisitos jurisprudenciales de procedibilidad dispuestos por el máximo

---

<sup>3</sup> Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.

órgano de cierre constitucional para controvertir decisiones judiciales.

Remito para su conocimiento y demás fines pertinentes copia del acta de audiencias preliminares llevadas a cabo el 13/05/2011, Acta de Audiencia de Verificación de Legalidad de Preacuerdo y Sentencia Anticipada Nro.64 del 19/09/2011.



DIEGO LUIS HERNÁNDEZ TRUJILLO  
JUEZ

Con sumo respeto,